

rumbo económico se mantendría inalterado hasta la asunción del nuevo gobierno. En este sentido, los programas económicos de coyuntura reflejaban, como sostiene PORTANTIERO, la imposibilidad de los sectores dominantes para estructurar una salida económica razonable ⁽⁷⁶⁾.

El hecho más destacable de la evolución económica de los últimos años estaba dado por la expansión de la inversión pública. En efecto, en el período militar crecieron en forma apreciable las inversiones en obras de infraestructura, equipamiento y transportes. Pero este aspecto quedaba relativizado por la fuerte caída de la inversión privada, reflejando el fracaso en el objetivo original de modificar la conducta de los agentes económicos.)

Por el contrario, las expectativas negativas generadas por la espiral inflacionaria y el déficit externo conducían a maximizar ganancias de corto plazo y esterilizar cualquier recuperación del salario real. Esto repercutió en una modificación de los patrones de consumo, en los que se observó un aumento del consumo de bienes de tipo durable (más vinculado a estratos de altos ingresos), mientras se contraía el de bienes de consumo no durables (asociado más a los sectores asalariados). Sin embargo, hacia principios de 1973, aunque se agudizaba el desequilibrio de las cuentas del sector público y la tasa mensual de inflación llegaba al 6%, el panorama internacional se presentaba más favorable, porque los términos de intercambio eran positivos para la Argentina como consecuencia del incremento de los precios de los productos primarios, especialmente de cereales y carnes. Es decir que en el año de la crisis del petróleo y del aumento de sus precios, también subían los precios de las exportaciones argentinas, lo que constituía un alivio, al menos en el corto plazo, para el nuevo gobierno constitucional.)

6.6. LA VUELTA DEL PERONISMO: CAMPORA, PERON, ISABEL PERON

El regreso de PERON, tras 17 años de exilio —el 17 de noviembre de 1972—, desarmó los proyectos de LANUSSE. El viejo líder retornó, significativamente, luego de la fecha establecida por el gobierno para habilitar candidaturas. Durante su estadía, inferior a un mes, PERON concretó tres hechos. Primero, reunió a los representantes de todas las agrupaciones políticas, asentando las bases de una convivencia partidaria, logrando la unánime adhesión a una democratización sin restricciones y garantizando el apoyo a políticas "nacionales" y "populares". De esta manera, alcanzó, al margen del gobierno, el acuerdo infructuosamente buscado por LANUSSE. Luego, formalizó el FREJULI, constituido por el peronismo, el "desarrollismo" de FROMDIZI, la democracia cristiana, el conservadorismo popular, desprendimientos del socialismo y del radicalismo y algunos partidos provinciales. La candidatura presidencial del Frente, impuesta por PERON, correspondió

(76) Cf. PORTANTIERO, J. C. (1973).

a HECTOR J. CAMPORA, y la de vicepresidente, a VICENTE SOLANO LIMA, del Partido Conservador Popular. Finalmente, la presencia de PERON reforzó el entusiasmo de sus seguidores, y, con su actitud conciliatoria hacia enemigos políticos de antaño, logró volcar a favor del FREJULI a numerosos electores indecisos. PERON ganó el desafío del gobierno de LANUSSE y se preparó para ratificar su éxito en las urnas.

En un escenario caracterizado por el repliegue de las FF.AA., sin la cohesión suficiente como para interrumpir el proceso electoral, se llevaron a cabo las elecciones en marzo de 1973. El FREJULI obtuvo el 49,5 % de los votos en la primera vuelta. La fórmula de la UCR, BALBIN-GAMMOND, reunió el 21,2 % de los sufragios. La dirigencia radical, dada la gran diferencia de votos, rehusó competir en una segunda vuelta, por lo que el gobierno reconoció el triunfo del Frente. LANUSSE y el grupo de generales liberales que lo acompañaron en su apuesta política quedaron descalificados ante el resto de las FF.AA., las que se retiraron —en medio del repudio popular— preservando su unidad interna y a la espera de los acontecimientos.

Desde el día de las elecciones y hasta el 25 de mayo —fecha de asunción del mando por las nuevas autoridades— los atentados terroristas se multiplicaron. En ese interin, como preludio a los enfrentamientos entre el líder justicialista y la radicalizada Juventud Peronista, PERON relevó al dirigente conductor de la misma, quien había propuesto la formación de milicias populares para garantizar la entrega del gobierno y defenderlo de sus enemigos. Así, trataba de contener la violencia, llamando a la prudencia y a la serenidad a los trabajadores y advirtiendo que su opción transitaba por los caminos de la legalidad ⁽⁷⁷⁾.

Sin embargo, con la asunción de CAMPORA se agudizaron los conflictos internos del peronismo. Los sectores revolucionarios, fundamentales protagonistas de la campaña electoral, intentaron dirimir su controversia con la desplazada burocracia sindical mediante violentos enfrentamientos. Por otra parte, desbordando al propio gobierno, la Juventud Peronista logró que CAMPORA —sin la previa aprobación del Congreso— decretara la amnistía para todos los presos políticos, incluidos los miembros de organizaciones armadas. Esta decisión contrarió a los militares, que, antes de las elecciones, habían manifestado su rechazo a una medida de tal índole. También numerosos miembros de la JP o ligados directamente a las organizaciones armadas ocuparon cargos gubernamentales de responsabilidad en el gobierno. Las demostraciones de fuerza de la izquierda peronista terminaron provocando una crisis de autoridad. La burocracia sindical aprovechó para pedir la renuncia de las autoridades, en tanto que los sectores empresarios y las clases medias tradicionales anhelaban la presencia de una conducción pacificadora ⁽⁷⁸⁾.

El retorno definitivo de PERON —el 20 de junio de 1973— fue el paso previo a su vuelta al manejo de los asuntos públicos y al intento de encuadrar todo conflicto dentro de los carriles institucionales. La fiesta que presuponía la presencia del

(77) DE RIZ, LILIANA, *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*, Buenos Aires, 1986, pág. 71.

(78) Sobre CAMPORA y el "camporismo", cf. BONASSO, MIGUEL, *El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo*, Buenos Aires, 1997.

viejo caudillo se transformó en la "masacre de Ezeiza". En las proximidades del aeropuerto, se produjo un sangriento enfrentamiento entre los sectores revolucionarios del peronismo y los más ortodoxos, vinculados a la extrema derecha nucleada en torno a LOPEZ REGA, secretario personal de PERON, con un saldo indeterminado de muertos y la huida en masa de miles de personas aterrorizadas. Las demandas de los sectores radicalizados, partidarios de una "patria socialista", no podían ser asimiladas dentro de los límites del proyecto político del peronismo. Al día siguiente, PERON reclamó el regreso a la ortodoxia partidaria y la necesidad de reorganizar el Estado. Su propuesta de "volver al orden legal y constitucional" encontró eco en todos los sectores políticos del centro y de la derecha. PERON retornaba para poner fin al vacío de poder.

Luego de un intento postrero de frenar la movilización popular, CAMPORA y SOLANO LIMA presentaron sus respectivas renuncias al Congreso, en el mes de julio. RAUL LASTIRI, titular de la Cámara de Diputados, fue designado presidente provisional. Así, se abrió el espacio para que PERON reconstituyera el poder del Estado contando con el apoyo de la burocracia sindical, marginada en el proceso anterior, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. En este marco, nuevas elecciones presidenciales, el 23 de setiembre, plebiscitaron —con el 62 % de los votos— la tercera presidencia de PERON, acompañado en la vicepresidencia por su esposa, MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON, más conocida como ISABEL PERON, o, directamente, ISABEL. La fórmula justicialista superó a la radical, encabezada por RICARDO BALBIN y FERNANDO DE LA RUA, que sumó algo más del 24 % de los votos.

PERON asumió el gobierno el 12 de octubre de 1973 y se propuso la reorganización del poder estatal. Estaba dispuesto a conducir la nación sin atender a las limitaciones de los intereses partidarios y sin condicionamientos ideológicos. Mediando entre las fuerzas sociales en pugna, su proyecto de poder exigía el fortalecimiento del poder estatal frente a los actores sociales y económicos y, a la vez, como recurso clave para disciplinar a las FF.AA. Para ello proponía una democracia integrada que encauzara los conflictos sociales, controlara las relaciones entre trabajadores y capitalistas y garantizara la estabilidad política del régimen.

Sin embargo, el objetivo de asegurar la gobernabilidad de la sociedad argentina tropezó con los irreductibles enfrentamientos de los distintos protagonistas sociales. Los conflictos gremiales no disminuyeron en frecuencia e intensidad. Las mejoras salariales desbordaron el Pacto Social, firmado en junio de 1973 y considerado por PERON como un pacto político orientado a encuadrar los conflictos de intereses entre las clases sociales. Los empresarios, argumentando descensos en la tasa de ganancias, también cuestionaron el Pacto y pugnaron por la flexibilización de los precios. Para ello, desde fines de 1973, acentuaron sus prácticas especulativas, eludieron los controles de precios, acapararon mercancías, apelaron al contrabando, etcétera.

Por otra parte, las exhortaciones de PERON a la Juventud Peronista y a los grupos armados para desistir de la violencia como recurso político y a aceptar su conducción fueron respondidas por los Montoneros con su disposición a dar batalla ideológica a la burocracia sindical, en el mismo momento en que ésta era respaldada por el propio presidente. En enero de 1974, el ERP atacó en Azul una

guarnición del Ejército, asesinando al jefe de la unidad y a su esposa. Ante este hecho, PERON destituyó al gobernador bonaerense, OSCAR BIDEGAIN, ligado a los sectores radicalizados del peronismo, e impulsó una reforma al Código Penal para enfrentar a la subversión, lo que provocó la renuncia de varios diputados representantes de la Juventud Peronista. Dos meses después, el Jefe de la policía cordobesa —con el aval de PERON— destituyó al gobernador y al vicegobernador de la provincia, pertenecientes a la izquierda peronista.

El enfrentamiento entre el presidente y la izquierda de su movimiento tuvo eclosión el 1º de mayo de 1974, en un acto celebrado en la Plaza de Mayo. Increpado públicamente por aquélla, PERON, desde los balcones de la Casa Rosada, descalificó y expulsó a dichos sectores, que abandonaron masivamente la Plaza. Cuando la situación parecía volverse ingobernable debido a las tensiones políticas y sociales de los últimos meses, el 12 de junio, PERON amenazó con su renuncia. En la que sería su última aparición pública, trató de recuperar la iniciativa y, apelando a su presencia carismática, solicitó colaboración y sostuvo que "... Sin el apoyo masivo de los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron, pero luego evidenciaron una gran comprensión y sentido de responsabilidad, no sólo no deseo seguir gobernando, sino que soy partidario de que lo hagan los que pueden hacerlo mejor..." (79).

La muerte de PERON, el 1º de julio, se produjo en un momento crítico para su proyecto político. Los distintos sectores políticos y las Fuerzas Armadas respaldaron la continuidad institucional representada en la persona de su sucesora, ISABEL PERON. Ello no evitó que comenzara a gestarse un vacío político que terminaría llevando al país a una crisis sin precedentes. Con PERON había desaparecido el único liderazgo capaz de encauzar los antagonismos políticos emergentes de las luchas sociales. A partir de su muerte, la agudización de los conflictos y la violencia política —entre los meses de julio de 1974 y 1975 se registraron cerca de quinientos asesinatos políticos— marcarían la descomposición del proyecto peronista.

ISABEL PERON y su entorno —en el que adquirió preeminencia JOSE LOPEZ REGA, ministro de Bienestar Social y secretario privado de la Presidencia—, en lugar de la estrategia de convergencia impulsada por PERON, definieron un accionar basado en el sectarismo y el aislamiento. Incorporaron al gabinete elementos de las vertientes más reaccionarias del movimiento peronista, mientras el enfrentamiento entre los propios peronistas se transformaba en el conflicto central de la escena política. Inicialmente, la dirigencia sindical acompañó esta estrategia presionando para lograr el desplazamiento del ministro GELBARD y respaldando las medidas gubernamentales destinadas a destituir a los gobernadores de la izquierda peronista. A mediados de 1975, tanto la izquierda peronista como los sectores empresariales y políticos vinculados a GELBARD, que era acusado de comunista, habían sido excluidos de la lucha por el poder (80).

(79) De Ruz, L. (1986), pág. 137.

(80) CAVAROZZI, M. (1983), pág. 57. Para una lúcida biografía de GELBARD, ver SEDANE, M. (1988).

Por su parte, las coincidencias entre los jefes sindicales y el gobierno tuvieron corta vida. Pronto se hizo evidente que ISABEL y sus asesores no estaban dispuestos a comprometerse en negociaciones con otras fuerzas políticas y sociales. Así, las pretensiones de la dirección sindical de participar más directamente en las decisiones gubernamentales fueron ignoradas. Por otra parte, las negociaciones de las comisiones paritarias, a partir de 1975, aceleraron la frecuencia de los conflictos laborales y tensaron las relaciones entre el sindicalismo y el gobierno. En junio de 1975, con la designación de CELESTINO RODRIGO —vinculado a LOPEZ REGA— al frente del Ministerio de Economía, se tomó una serie de medidas que, entre sus objetivos, buscaban colocar a los dirigentes sindicales en una situación insostenible. El fuerte impacto inflacionario de las medidas económicas instrumentadas, inéditas en un gobierno peronista, y el tope impuesto a los aumentos salariales abrieron el camino a "una lucha por el poder y por el dominio político en torno del reajuste de los precios relativos y sus obvias consecuencias sobre las transferencias de los ingresos" (81). El gobierno dispuso la paralización de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, lo que desató una movilización masiva contra el nuevo ministro que desbordó a la dirigencia sindical.

Los jefes sindicales debieron lanzarse a una lucha en la que estaba en juego su propia supervivencia. Tratando de mostrar a las bases que ellos eran sus defensores presionaron y lograron que el gobierno, en un principio, liberara las negociaciones entre empresarios y sindicatos para fijar nuevos aumentos salariales. Posteriormente, el Ejecutivo derogó los acuerdos salariales alcanzados y volvió a fijar subas inferiores a las pretendidas por los sindicatos. El ministro de Trabajo, hombre proveniente del sindicalismo, presentó su renuncia, y la CGT decidió un paro general de 48 horas para el 7 y 8 de julio. El desenlace de la crisis consagró la victoria de los jefes sindicales: el gobierno anunció la aprobación a los contratos salariales en litigio y, días después, RODRIGO y LOPEZ REGA presentaron sus renuncias. Por fin, los dirigentes gremiales pasaban a convertirse en actores centrales de las decisiones del Estado y en los principales respaldos del gobierno.

El aislamiento del gobierno de ISABEL PERON respecto de la sociedad civil tuvo otras consecuencias dramáticas. No sólo se intensificaron las pugnas internas en el movimiento peronista, sino que también recrudescieron las actividades guerrilleras y se multiplicó la violencia de la derecha. En un marco de creciente ingobernabilidad, las autoridades lanzaron un operativo para eliminar a la izquierda dentro y fuera del peronismo. Un grupo terrorista de ultraderecha, protegido y armado por LOPEZ REGA y denominado "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) desplegó una represión política y cultural de vastos alcances. Mientras el gobierno clausuraba los órganos de expresión de la Juventud Peronista y sancionaba una ley de seguridad del Estado, la Triple A asesinaba, entre otros, a RODOLFO ORTEGA PEÑA, diputado nacional justicialista, a SILVIO FRONDEZI, intelectual marxista, y a ATILIO LOPEZ, ex vicegobernador de Córdoba.

(81) DI TELLA, GUIDO, *Perón-Perón 1973-1976*. Buenos Aires, 1983, pág. 212.

Por su parte, tras el breve interregno marcado por la muerte de PERON, la izquierda peronista decidió enfrentar directamente al gobierno. En setiembre de 1974, MARIO FIRMENICH, jefe de Montoneros, anunció el pasaje a la clandestinidad y la reasunción de las actividades guerrilleras. Esta opción militar, como respuesta a la represión, era acompañada de una propuesta política orientada a dar al peronismo un perfil revolucionario, y emergía como contrapartida a los sucesores de PERON en el gobierno, que trataban de redefinir la identidad política del peronismo hacia la derecha. Entre los asesinatos más impactantes de los Montoneros figuró el del jefe de la Policía Federal, ALBERTO VILLAR, víctima de un atentado con explosivos. El resultado político de este accionar fue la declaración del estado de sitio por el Ejecutivo en noviembre de 1974 y la amplificación de la actividad represiva gubernamental.

Para asegurar su permanencia en el poder, ISABEL intentó recostarse en las Fuerzas Armadas. El primer paso se había efectivizado en mayo de 1974, cuando el Poder Ejecutivo forzó la renuncia del comandante del ejército, Gral. LEANDRO ANAYA, designando en su reemplazo al Gral. ALBERTO NUMA LAPLANE. Partidario del "profesionalismo integrado", el nuevo comandante pretendía comprometer a la institución militar con la política del gobierno. A despecho de este propósito, las jerarquías militares se resistieron a intervenir contra la CGT durante la crisis de julio de 1975 y, en un tácito alineamiento con la oposición, contribuyeron a precipitar la caída de LOPEZ REGA y RODRIGO (82).

El nuevo paso que dio ISABEL en su estrategia hacia los militares tuvo como desenlace una severa crisis en el Ejército. En agosto de 1975, durante la reorganización del gabinete que siguió a los hechos de julio, nombró al Cnel. VICENTE DAMASCO como ministro del Interior. La designación no fue bien recibida por las jerarquías militares, que manifestaron su "total independencia" del nuevo gabinete e impusieron el pase a retiro de DAMASCO. También lograron el relevo de NUMA LAPLANE, aunque la presidenta se reservó el derecho a nombrar a su reemplazante. La designación recayó en uno de los generales más jóvenes, JORGE RAFAEL VIDELA, quien se comprometió a respetar el orden constitucional. En el transcurso de estos acontecimientos se acrecentaron los rumores de golpe militar y la CGT declaró el estado de alerta. Como corolario, ISABEL vio desvanecerse su esfuerzo por modificar a su favor la relación de fuerzas y los militares prefirieron afirmarse en la línea de "profesionalismo prescindente", doctrina tras la cual se ocultaban propósitos golpistas (83).

Agobiada por los acontecimientos, ISABEL pidió licencia por enfermedad, alejándose temporarily del gobierno. El presidente provisional del Senado, ITALO A. LUDER, se hizo cargo interinamente de la presidencia, intentando recomponer el orden social y rehabilitar las instituciones políticas. Contra estos propósitos conspiraba la agudización del conflicto que, acerca de su identidad, dividía a los

(82) CAVAROZZI, M. (1983), pág. 57.

(83) De RIZ, L. (1986), pág. 190.

peronistas en "verticalistas" (partidarios de ISABEL) y "antiverticalistas" (partidarios de retomar las banderas de PERON). Otra lucha encubierta, dentro y fuera del peronismo, involucraba a distintos aspirantes a suceder a la presidenta en caso de concretarse su renuncia. Por entonces, la irritación de los militares se incrementó con el asalto al cuartel del Regimiento 29 de Infantería en Formosa. Llevado a cabo por los Montoneros en octubre de 1975. Esto obligó al presidente interino a enviar al Congreso un proyecto de creación del Consejo de Defensa Nacional y del de Seguridad Interna, que estatuyó un nuevo avance del poder militar al poner en sus manos la responsabilidad total de la lucha contra la subversión.

De todos modos, desde febrero de 1975, el Ejército se encontraba combatiendo un brote de guerrilla rural en Tucumán. Los guerrilleros pertenecientes al ERP habían iniciado sus acciones en esa región en 1974. El Poder Ejecutivo, al disponer el envío de las tropas militares, puso en marcha el denominado "Operativo Independencia", que culminaría con la gradual extinción del foco insurgente. Asimismo, en diciembre de 1975, el ERP intentó, infructuosamente, el copamiento del Batallón Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo. En este asalto participaron varios centenares de guerrilleros, que, como resultado del enfrentamiento con los defensores del Batallón, experimentaron más de cien bajas. Estas derrotas marcaron el ocaso de la actividad del ERP ⁽⁸⁴⁾.

Pese a los rumores acerca de su renuncia, ISABEL retornó a principios de noviembre al ejercicio de sus funciones. Anunció su decisión de continuar en el cargo, para lo cual —afirmó— contaba con el apoyo de las FF.AA., la Iglesia Católica, el movimiento obrero organizado, las centrales empresarias y los partidos políticos. Sin embargo, aparentemente, sólo entre los partidos políticos se encontraban los defensores del orden constitucional. El involucramiento de la presidenta, junto a figuras del lopezreguismo, en un escándalo por malversación de fondos acentuó la oposición a su presencia en el gobierno tanto dentro como fuera del peronismo. La investigación del ilícito en el Congreso precipitó la ruptura del bloque oficialista y la formación de un bloque peronista antiverticalista que privó al gobierno de la mayoría en la Cámara de Diputados. Tanto políticos disidentes como opositores trataban de encontrar una salida legal para la crisis de autoridad del Estado, conformando un gobierno sin ISABEL. Tampoco el movimiento sindical apoyaba unívocamente a la presidenta. La mayoría de los líderes de la CGT y buena parte de las 62 Organizaciones se oponían a ISABEL. Los sindicalistas antiverticalistas junto a los políticos disconformes presionaban para lograr su alejamiento. Cediendo a dichas presiones, ISABEL PERON concedió el adelantamiento de la fecha de las elecciones generales fijándolas para octubre de 1976.

(84) Cf. SEOANE, M. (1993).

6.7. LA INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO OBRERO

La campaña electoral del peronismo, que desembocó en las elecciones de marzo de 1973, encontró al sindicalismo en una posición relegada. PERON otorgó un lugar de preeminencia a los sectores juveniles radicalizados en detrimento del movimiento obrero organizado, considerado, hasta entonces, como la "columna vertebral" del peronismo. Creía que de esta manera reflejaba el espíritu de movilización popular que impulsaba su retorno al poder. Por otro lado, evitó asociar ese retorno con la desprestigiada imagen de los jefes sindicales. En este contexto, los jefes sindicales buscaron aproximarse a otros sectores que, como ellos, juzgaban que el activismo de la militancia juvenil se apartaba de las consignas tradicionales de la ortodoxia peronista. Condenados por el viejo líder al aislamiento en el interior de la vasta coalición política que lo acompañaba, los sindicalistas comenzaron a prepararse para modificar una relación de fuerzas que, por entonces, les era desfavorable.

El triunfo electoral despertó entre los sindicalistas, como entre las clases populares, la expectativa de sustanciales aumentos de salarios. Sin embargo, la política de ingresos del ministro GELBARD, encuadrada dentro del Pacto Social, buscaba compatibilizar los objetivos distribucionistas con la coyuntura económica del momento. Frente a un aumento de salarios situado por debajo de las demandas de los trabajadores y la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años, la conducción cegetista debió postergar sus objetivos reivindicativos para acomodarse a la política de concertación impuesta, a través de GELBARD, por la autoridad política de PERON.

Pero la aceptación del Pacto fue un vuelco táctico de la CGT. Los dirigentes sindicales —protagonistas en el pasado de frecuentes desconocimientos de las directivas de PERON durante su exilio—, al sumarse a la concertación, retornaron a la disciplina impuesta por el líder justicialista, tratando de reconquistar los espacios perdidos previamente. De esta manera, apostaban a capitalizar la presumible ruptura de PERON con los sectores juveniles y a obtener el reconocimiento de su influencia en el poder ⁽⁸⁵⁾.

Sin embargo, esta decisión tuvo un costo político. Los trabajadores interpretaron que el nuevo gobierno de CAMPORA favorecería sus demandas salariales. La conflictividad laboral se intensificó, varias fábricas fueron tomadas por los obreros y se multiplicaron los reclamos por la reincorporación de delegados y activistas despedidos durante la anterior dictadura. Este activismo se combinaba con enfrentamientos entre los trabajadores y los aparatos sindicales. La CGT, compro-

(85) TORRE, J. C. (1983), pág. 53.

metida con el Pacto Social, debió asistir pasivamente a esta ofensiva, ahondándose la brecha que se había ido abriendo entre los jefes sindicales y las movilizaciones de los trabajadores a partir de los últimos tramos de la Revolución Argentina.

El regreso definitivo de PERÓN dio lugar a un nuevo diseño político. La imponente manifestación política que asistió en Ezeiza al retorno del líder justicialista se transformó en una tragedia por el enfrentamiento armado entre los sectores internos del peronismo. A partir de ese episodio, PERÓN pasó a convertirse en el eje de un ajuste de cuentas con los sectores juveniles y guerrilleros tras el objetivo de desmontar la movilización popular que jaqueaba al gobierno de CAMPORA.

De esta manera, se abrió el espacio para la reconstitución de la alianza del caudillo con los hasta entonces relegados jefes sindicales. La campaña electoral que permitió el acceso de PERÓN a su tercer mandato presidencial, a diferencia de la que proyectó a CAMPORA, contó con el activo proselitismo de los sindicatos. El despliegue sindical tuvo como protagonista destacado al secretario general de la UOM, LORENZO MIGUEL. El ulterior triunfo electoral fue calurosamente celebrado por los sindicalistas, que preveían un acceso más fluido a las decisiones del poder⁽⁸⁶⁾.

Pero un nuevo episodio sangriento empañó la euforia de la dirigencia sindical. Dos días después de las elecciones que consagraron el triunfo de PERÓN —el 26 de setiembre— fue asesinado el secretario general de la CGT, JOSÉ I. RUCCI. Los sucesos posteriores confirmarían que la eliminación de RUCCI no anuló el poder de la cuestionada burocracia sindical. Por el contrario, galvanizó a su dirigencia, exacerbó su hostilidad hacia la JP y la izquierda y confundió a muchos trabajadores, partidarios de la renovación orgánica de las conducciones sindicales. Una semana después, el presidente electo ratificó, en la propia central obrera, que "el movimiento sindical era la columna vertebral del peronismo", y exhortó a los dirigentes sindicales a combatir la infiltración marxista.

Sin embargo, subsistía un problema que ponía a prueba el reencuentro del caudillo con los jefes sindicales. La aspiración sindical apuntaba a lograr la apertura de las negociaciones colectivas y era alentada por la sospecha de que PERÓN en el gobierno dejaría de lado la política económica del ministro GELBARD. Pero la política de concertación social patrocinada por PERÓN no se avenía con las aspiraciones reivindicativas inmediatas de sus huestes políticas ni de las del aparato sindical. El propio PERÓN ratificó el mantenimiento del Pacto Social, frustrando las pretensiones sindicales.

No obstante, luego de asumir su tercer gobierno, el presidente procuró asegurarse la lealtad de los jefes sindicales. A fines del mes de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó la ley 20.615, que, a instancias del PE y la CGT, modificaba la Ley de Asociaciones Profesionales sancionada durante la presidencia de FRONDISI. La reforma incrementaba el grado de centralización de las estructuras gremiales y reforzaba la protección jurídica de los jefes sindicales⁽⁸⁷⁾.

(86) DR. RIZ, L. (1986), pág. 94.

De esta manera, se establecían nuevos obstáculos a la democratización de los sindicatos en momentos en que diversos sectores, entre ellos el peronismo combativo y la izquierda, demandaban la renovación de las estructuras gremiales y de sus conducciones.

Mientras tanto, la movilización obrera no se detenía. Las experiencias de los sindicatos cordobeses se propagaron a Buenos Aires: los conflictos laborales se sucedían en los lugares de trabajo, donde los obreros enfrentaron ásperamente a empresarios y aparatos sindicales demandando aumentos salariales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Las ocupaciones de plantas fabriles y el cuestionamiento a las prerrogativas de las gerencias fueron las expresiones de un estado de rebeldía que traducía la brecha entre los trabajadores y sus representantes tras largos años en que las prácticas de negociación habían desaparecido. En general, los movimientos reivindicativos eran lanzados por los propios trabajadores al margen de los liderazgos sindicales nacionales y escasamente influidos por planteos políticos radicalizados.

Si bien en marzo de 1974 la CGT y la CGE renegociaron el Pacto Social acordando incrementos salariales, las luchas por mayores ingresos no se atenuaron. En muchos casos, los trabajadores obtenían aumentos sustancialmente superiores a los conseguidos por aquella renegociación. Muchos empresarios optaron por avenirse a las demandas salariales trasladándolas a los precios, sin contar con la autorización gubernamental. El conflicto social se traducía en una intensa pugna por la distribución del ingreso y los mecanismos de concertación se mostraban incapaces de contenerlo.

A principios de junio de 1974, el sindicalismo logró que el Senado aprobara una de las conquistas más significativas para el movimiento obrero. Se trataba de la Ley de Contrato de Trabajo, que reglamentaba la actividad laboral en todo el país. La nueva legislación habilitaba el acceso sindical a las contabilidades de las empresas —objetivo al que aspiraban, sin éxito, los movimientos sindicales europeos—, establecía la prohibición de despedir a trabajadores próximos a casarse, consolidaba la vigencia de la indemnización por despido sin causa, el derecho a pensión a las mujeres unidas de hecho con trabajadores, disponía medidas para asegurar las condiciones de salubridad en las empresas, etc. Si bien la nueva ley dejaba fuera de sus alcances a los empleados estatales y convalidaba el fondo de desempleo para los obreros de la construcción, excluyéndolos de los beneficios de la indemnización, su vigencia fortaleció la capacidad negociadora y la posición de los trabajadores frente a las empresas⁽⁸⁸⁾.

Mientras tanto, otro objetivo vinculó a la dirección de los sindicatos nacionales con el gobierno y las empresas: la eliminación de la oposición sindical. La aprobación parlamentaria de la Ley de Seguridad suministró a las autoridades del Ministerio de Trabajo un instrumento para reprimir las huelgas ilegales. La aplicación de las nuevas disposiciones logró la disminución de los conflictos

(87) TORRE, J. C. (1983), págs. 74 y 75.

(88) CALELLO, O. y PARCERO, D. (1984), pág. 150.

laborales y la desaparición de las ocupaciones de fábricas. Por otra parte, se intensificó la ofensiva contra las direcciones sindicales de oposición clasista o combativa, y en menos de tres meses el gobierno doblegó a los líderes sindicales de esa oposición. A fines de 1974, como corolario de esta exitosa ofensiva, una serie de elecciones y asambleas confirmó a los principales jefes sindicales nacionales en el control de la estructura de los sindicatos.

El fortalecido aparato sindical se aprestó a alcanzar su viejo objetivo de libre negociación colectiva de los salarios. El primer paso en esa dirección, luego de la muerte de PERON, fue su asociación con el entorno de la presidenta ISABEL PERON para provocar la renuncia de GELBARD, artífice del Pacto Social que restringía la política salarial. Una nueva oportunidad para reconquistar el prestigio perdido por los jefes sindicales se presentó a partir de febrero de 1975, cuando el gobierno convocó a empresarios y sindicatos para discutir los salarios y las condiciones de trabajo. Sin embargo, el drástico reajuste dispuesto por el ministro RODRIGO sorprendió a aquéllos en el curso de las negociaciones, obligando a su transitoria suspensión. Si bien la presión sindical logró que el gobierno desistiera de su propósito de poner límites a los aumentos salariales a acordarse, a partir de este momento comenzó a gestarse la ruptura definitiva del entorno presidencial con los jefes sindicales.

La magnitud de los incrementos salariales alcanzados durante las negociaciones puso en jaque la nueva política económica impulsada por RODRIGO. A fines de junio de 1975, la presidenta anuló los acuerdos y ofreció aumentos por debajo de los obtenidos en las convenciones. Esta decisión provocó la paralización del trabajo en todo el país y puso a los líderes sindicales en la disyuntiva de tener que confrontar con el gobierno. Para los sindicalistas, aceptar la oferta gubernamental significaba reabrir la brecha—que trabajosamente intentaban cerrar— con la masa obrera. Por su parte, dentro de la concepción autoritaria del entorno lopezreguista no había un espacio para colaborar con el movimiento sindical. La situación comenzó a definirse cuando la CGT dispuso, tras una semana de indecisión, un paro de 48 horas. Era la primera vez que la central obrera establecía una huelga general durante un gobierno peronista. Las consecuencias políticas, más arriba analizadas, significaron un triunfo de los jefes sindicales y la frustración del intento presidencial por socavar su poder⁽⁸⁹⁾.

Luego de la confrontación, la presidenta se alejó temporariamente de sus funciones y emergió un nuevo esquema de poder. En agosto de 1975, una coalición de sindicalistas y políticos asumió el gobierno debiendo hacerse cargo de las consecuencias del shock provocado por el renunciante ministro RODRIGO: una incipiente recesión, abrupto aumento del desempleo y caída de la producción industrial. A instancias de la central obrera, el gobierno decretó una tregua social de 180 días durante los cuales se prohibían los despidos y las huelgas. De inmediato, el nuevo ministro de Economía, ANTONIO CAPIERO, trató de rehabilitar la política de concertación entre el Estado, la CGT y la CGE. Ambas iniciativas

(89) DE RIZ, L. (1987), pág. 181.

nafragaron en medio de una intensa conflictividad laboral empujada por las demandas salariales. En lugar de aportar soluciones y necesitada de rehabilitarse frente a los trabajadores, la jefatura sindical pareció refugiarse en su tradición al rol reivindicacionista, dispuesta a desempeñarse como grupo de presión⁽⁹⁰⁾.

Al reasumir el gobierno, la presidenta disolvió la *entente* sindical-política. El nuevo golpe de timón puso al desnudo la debilidad de la coalición: devueltos al llano, los líderes sindicales se replegaron en la pasividad. Ante la inminencia de una quiebra institucional, no se sumaron a una salida política que neutralizara las amenazas golpistas, renunciando a asumir mayores responsabilidades en la defensa del orden constitucional. Tanto sindicalistas como políticos oficialistas desoyeron los pedidos de la oposición civil para evitar el golpe militar y conformar un gobierno sin ISABEL PERON⁽⁹¹⁾.

6.8. PARTIDOS POLITICOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Al acceder por tercera vez al gobierno, el peronismo había aglutinado en un punto máximo a grupos disímiles. Al capitalizar el generalizado repudio a la Revolución Argentina, PERON integró a sectores sociales y políticos enfrentados e interiorizó sus conflictos en dichos aspectos. Durante el interregno de CAMPORA, afloraron los proyectos políticos encontrados en el propio justicialismo, acentuándose la ingobernabilidad heredada del anterior régimen militar. El movimiento obrero organizado trató de conquistar un espacio dentro de la gestión estatal rescatando la ortodoxia peronista, en tanto que los sectores juveniles de la clase media recientemente peronizados pugnaban por un proyecto alternativo de sociedad levantando la bandera del "socialismo nacional". Atrincherados en distintos aparatos del Estado, ambos sectores libraron combates tendientes a dirimir posiciones dentro del poder. De esta manera, se fue profundizando en la sociedad la pérdida de reconocimiento de la autoridad estatal.

La presencia de PERON al frente del gobierno pasó a constituirse en un imperativo. Luego de exhortar a la Juventud Peronista y a los grupos armados a abandonar la violencia como recurso político y a responder a su conducción, el líder excluyó a los sectores radicalizados, dado que sus demandas no se compatibilizaban con la reconstitución del orden político que requería su proyecto. Avaló la destitución de gobernadores ligados a la izquierda peronista y conminó a los diputados de la Juventud Peronista, en desacuerdo con las reformas al Código Penal que incrementaban las penas a las actividades guerrilleras, a abandonar el movimiento y a precipitar sus renuncias a las bancas. El enfrentamiento con los sectores de la izquierda de su partido culminó durante la celebración del 1º de mayo de 1974, cuando PERON, increpado públicamente por aquellos sectores, los

(90) TORRE, J. C. (1983), pág. 143.

(91) TORRE, J. C. (1983), págs. 153 y 154.

expulsó de la Plaza de Mayo. Días después, la rama juvenil fue excluida del máximo organismo de conducción del justicialismo, perdiendo todo espacio político para luchar por el "socialismo nacional" dentro del peronismo. Los Montoneros no fueron proscritos, aunque anunciaron su retorno a la resistencia. PERON, para preservar la gobernabilidad y la ortodoxia partidaria, eligió a la dirigencia gremial.

La purga de elementos izquierdistas se acentuó al asumir ISABEL PERON. La Universidad de Buenos Aires, donde conservaban su preeminencia aquéllos, se convirtió en un objetivo de los sectores más reaccionarios del peronismo, encaramados en el gobierno de ISABEL. La designación del anacrónico OSCAR IVANISEVICH al frente del Ministerio de Educación fue seguida con el nombramiento como interventor del rectorado de la UBA del fascista ALBERTO OTTAGLIANO y con el inicio de un clima de discriminación y represión ideológica que alejó a varios profesores de sus cátedras. Por otra parte, varios gobernadores peronistas ligados a la izquierda partidaria fueron acusados de "infiltrados" y destituidos por la dirigencia sindical con el apoyo de sectores derechistas. En este marco, el Partido Justicialista permaneció eclipsado en manos de dirigentes "verticalistas" fieles a ISABEL y con sus sectores moderados marginados, en tanto que el diseño de la política gubernamental quedó confinado a las maniobras del lopezrreguismo dentro del entorno presidencial.

Como era previsible, la izquierda peronista rompió lanzas con los sucesores de PERON. La JP y Montoneros anunciaron la ruptura total con el gobierno y el retorno a la guerrilla. En simetría con la estrategia lopezrreguista, los Montoneros se dispusieron a utilizar la violencia para imponer el rumbo de un proceso que marchaba a la deriva. Sin embargo, ante la eventualidad de que la crisis del gobierno de ISABEL desembocara en una salida electoral, no descartaron la alternativa de integrarse al sistema político. Así, constituyeron el Partido Peronista Auténtico (PPA) —coalición formada por la Tendencia Revolucionaria, la mayoría de los gobernadores depuestos y algunos veteranos sindicalistas de la resistencia peronista de los años '50 y '60—, que participó en las elecciones para gobernador celebradas en Misiones, en marzo de 1975. Esta apuesta fue coronada por un magro resultado y, en definitiva, los sectores "militaristas" de los Montoneros optaron por sus ataques a las FF.AA. En noviembre de 1975, la suerte del PPA quedó sellada al ser prohibido por el gobierno ⁽⁹²⁾.

Fracasada la operación política concebida por el lopezrreguismo, el peronismo quedó atravesado por serias disidencias internas. Frente a los "verticalistas", que consideraban a ISABEL como la heredera indiscutible de PERON y la última garantía de la unidad partidaria, aparecieron los "antiverticalistas", que planteaban la necesidad de recuperar el terreno perdido, retornar a las fuentes del justicialismo, limitar los poderes de la presidenta y apartar al entorno de advenedizos que la rodeaba. La

(92) DE RIZ, LILIANA. *La política en suspenso: 1966/1976*, Buenos Aires, 2000, pág. 173.

disputa terminó dividiendo a la bancada legislativa del oficialismo y algunos legisladores "antiverticalistas" llegaron a auspiciar el alejamiento de ISABEL ⁽⁹³⁾.

Hacia fines de 1975, el justicialismo quedó reducido a una superestructura resquebrajada. Las bases partidarias se encontraban desorientadas, y la dirigencia se resignó a la espera del golpe militar, apostando a una futura reorganización. Por otra parte, la alianza política que lo tuvo como protagonista principal se desarticuló, y una de sus fuerzas integrantes, el MID, declaraba vaciado e inexistente el FREJULI, a la vez que tomaba distancia del mismo. La disgregación del campo político también afectó a la oposición leal al gobierno: la UCR y la Alianza Popular Revolucionaria.

Luego de las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la derrota de la UCR a manos del FREJULI incentivó las críticas internas a la conducción del partido. El Comité Nacional explicó dicho desenlace como un resultado del "precio político" que debieron pagar el radicalismo y BALBIN para asegurar la realización de los comicios e impedir las proscripciones. Por su parte, el Movimiento de Renovación y Cambio emitió un documento en mayo de 1973 formulando severas críticas a la conducción balbinista. En primer lugar, cuestionó la táctica de evitar críticas al anterior gobierno militar para no comprometer la realización de las elecciones, lo que hizo aparecer al radicalismo, frente a importantes sectores del pueblo, como una versión continuista de dicho gobierno. En segundo término, criticó el ambiguo discurso político de BALBIN, en tanto responsable de haber impedido que el radicalismo se convirtiera en una alternativa política para el país. Además, el discurso balbinista, al enfatizar la pacificación, la integración social y la conciliación, apareció como neutro frente a un electorado que buscaba cambios sociales. También puntualizó que el radicalismo no había comprendido ni había tenido poder de convocatoria dentro de la juventud. Finalmente, acusó a la conducción partidaria de no haber valorado el papel del trabajo organizado y de no difundir el ideario radical en ese sector social. El documento del MRC propició la instauración de una "auténtica democracia social" y la reconstrucción del radicalismo para combatir el privilegio sobre la base de un programa concreto y definido.

Frente a la gestión peronista, el radicalismo mantuvo una actitud de "oposición constructiva". Por un lado, apoyó el andamiaje político-institucional formulado por PERON. Al fallecer el presidente, respaldó a ISABEL "para servir a la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora". Cuando fue configurándose el síndrome de una sociedad desgobernada, trató de evitar críticas que pusieran en peligro el orden democrático que había contribuido a construir con el ahora partido oficialista. BALBIN, apoyado por casi todo el movimiento radical, condenó la posibilidad de un golpe militar, y hubo rumores acerca de la probabilidad de una alianza entre el justicialismo y el radicalismo para conformar un gobierno de coalición que asegurara la gobernabilidad del país.

(93) MACEYRA, HORACIO. *Cámpora/Perón/Isabel*, Buenos Aires, 1983, págs. 144-152.

Hacia fines de 1974, la división interna de la UCR se profundizó. A pesar de que BALBIN ganó las elecciones internas en siete distritos nacionales, las disidencias se acrecentaron a medida que el gobierno justicialista se debilitaba. El MRC consideraba que la crítica constructiva a dicho gobierno, si bien evitaba un nuevo antagonismo entre ambas fuerzas con vocación nacional y popular, impedía que la UCR apareciera como una verdadera alternativa de poder en el sistema político argentino. Proponía una oposición crítica y, desde una óptica progresista, impulsaba reformas de carácter estructural que colocaran al partido en una posición de vanguardia. Por otro lado, ILLIA —en representación de sectores del radicalismo cordobés— presionaba a la Intransigencia Nacional para que el radicalismo se adhiriera a las posturas del MRC (94).

La actitud de BALBIN se mantuvo hasta el final. Siguió colaborando con el justicialismo tratando de preservar el orden democrático. Una semana antes del golpe, en un discurso televisivo había mostrado su desazón ante la imposibilidad de encontrar un camino para resolver los problemas del momento, aunque sostuvo que "...Todos los incurables tienen cura, cinco minutos antes de la muerte... Desearía que los argentinos no empezáramos a contar ahora los últimos cinco minutos...". Cuando se produjo el golpe militar lo aceptó con resignación y consideró que se trataba de una intervención temporaria y excepcional con el objetivo de regularizar el funcionamiento de la democracia.

El PI, integrante de la Alianza Popular Revolucionaria que participó en los comicios de marzo de 1973, fue otro oponente leal del gobierno justicialista. Tempranamente había abandonado el FREJULI en desacuerdo con sus carencias programáticas y sosteniendo la necesidad de una revolución nacional como "único camino para la liberación del pueblo de toda dependencia y de toda opresión económica, política y cultural" y como "única vía hacia la socialización del sistema económico". Desde esta perspectiva, estuvo en desacuerdo con la política económica del gobierno. Luego de la muerte de PERON, afirmó que las instituciones sólo serían defendidas con eficacia si se cumplimentaban las exigencias revolucionarias del pueblo. A fines de 1975, la convención nacional partidaria aprobó un documento en favor de "una sociedad más justa" y de "un movimiento de carácter nacional, revolucionario y cristiano" para oponerse a "un sistema en crisis". Correspondió al titular de los intransigentes, OSCAR ALENDE, la emisión del último mensaje radial previo al golpe militar. El 23 de marzo de 1976, por la Cadena Nacional, manifestó su deseo de que las FF.AA. se mantuvieran integradas "en una gran política en resguardo de los valores nacionales y de respeto por la voluntad del pueblo" (95).

Las fuerzas de la derecha liberal-conservadora constituyeron la oposición más contundente al gobierno justicialista. Entre 1973 y 1976 se nuclearon en tres alianzas a nivel nacional. La Alianza Popular Federalista, liderada por FRANCISCO MANRIQUE,

(94) ACUÑA, M. L. (1984), págs. 208-210.

(95) NOSIGLIA, JULIO E., *El Partido Intransigente*, Buenos Aires, 1983, págs. 93-98.

integrada por el Partido Demócrata Progresista, antiguos sectores del aramburismo y sectores de la Federación Nacional de Partidos de Centro. La Alianza Republicana y Federal, apoyada por sectores provinciales de esa misma federación. Y, finalmente, la Nueva Fuerza, liderada por ALVARO ALSOGARAY, con el agregado de sectores del interior del país y partidos de la Capital Federal. Tendían a representar a caudillos provinciales y a sectores económicos dominantes del interior y de la Capital, fundamentalmente sectores sociales altos y medio-altos cuyos intereses se vinculaban tanto a las esferas agrarias, industriales y financieras como comerciales, generalmente los de mayor concentración y transnacionalizados (96).

Estas fuerzas pusieron un particular énfasis en el señalamiento del caos y el desgobierno. La Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), vinculada a las alianzas arriba mencionadas, sostuvo —a mediados de 1975— que el Estado había perdido el monopolio del uso de la fuerza, lo que significaba el peligro de su propia destrucción. Por su parte, el Partido Federal, en diciembre de 1975, manifestaba a través de MANRIQUE que "difícilmente el país haya vivido alguna época parecida a la actual en orden a la carencia de un poder real que se asemeje al espíritu constitucional" (97).

Cuando era inminente el golpe militar, las fuerzas políticas de derecha se automarginaron de los intentos políticos por salvar la democracia. Varios de sus dirigentes se habían reunido y establecido coincidencias con los generales JORGE R. VIDELA y ROBERTO E. VIOLA con anterioridad al golpe. Por su parte, la Nueva Fuerza, pocos días antes de éste, afirmó la inminencia del fin del "régimen de treinta años constituido por el peronismo y la anacrónica oposición que le sirvió de marco (...). El caos en el ordenamiento económico con sus secuelas de corrupción y decadencia total ya se han producido, quedándonos sólo por delante soportar sus consecuencias". El Partido Federal, con la adhesión del Partido Socialista Democrático, sostuvo que "el gobierno y la oposición han caducado y ya hablan con un lenguaje de sepelio. Vivimos los últimos momentos del régimen que ha demostrado hasta el cansancio su incapacidad para gobernar. Conjuntamente se comprueba la incapacidad de las fuerzas políticas paralelas que, con un lenguaje de sepelio, tratan de buscar soluciones irreales e inoportunas. El pronunciamiento militar es inevitable, ya que el vacío de poder alguien lo tiene que llenar" (98). Para estas fuerzas políticas, la urgencia para cubrir el "vacío de poder" no permitía aguardar la solución institucional prevista con las elecciones generales de octubre de 1976.

El retorno del peronismo al gobierno planteó a las organizaciones empresariales un escenario caracterizado por el intento de reestructurar los sectores de poder. La designación de JOSE BER GELBARD, ex presidente de la CGE, como titular del Ministerio de Economía evidenciaba el propósito de privilegiar a esa organización, representativa de los intereses del empresariado nacional mediano y

(96) LATTUADA, MARIO J., *Política agraria del liberalismo-conservador 1946-1985*, Buenos Aires, 1987, págs. 17-26.

(97) Cf. MANSILLA, CESAR L., *Las fuerzas de Centro*, Buenos Aires, 1983.

(98) *La Opinión*, 21/3/1976.

pequeño, predominantemente ligado al mercado interno. El nuevo ministro estaba vinculado, ideológica y orgánicamente, desde sus inicios como dirigente empresarial en los primeros gobiernos peronistas, al Partido Comunista. Sus ideas políticas no le impidieron convertirse, con el tiempo, en la cabeza de un importante grupo empresarial nacional con intereses diversificados. Había estado asociado a una empresa de neumáticos (Fate), y luego se transformó en uno de los propietarios de Aluar, empresa productora de aluminio cuya prosperidad se debió a la vinculación "privilegiada" con el anterior gobierno militar, traducida en beneficios y concesiones diversas obtenidos a principios de los años '70. Esto le permitió mantener una fluida relación con el Gral. LANUSSE e intermediar entre éste y PERON. Desde el Ministerio, GELBARD establecería fuertes vínculos económicos con los países del bloque soviético, a la vez que conservaría poderosas amistades en los EE.UU. La figura contradictoria de GELBARD era el ejemplo de una "burguesía nacional" con fugaces influencias económicas e institucionales ligadas, más que a una base productiva sólida, a la posibilidad de desarrollar negocios con el Estado y a la asociación con los poderes políticos de turno, ya sea civiles o militares⁽⁹⁹⁾. Con aquél se esperaba que la política económica se fundamentara en las iniciativas de los empresarios privados nacionales y se transformara en una opción frente al capital monopolístico internacional.

GELBARD puso en práctica el Pacto Social. Las organizaciones corporativas de la gran burguesía —la UIA, la SRA y la CAC—, en situación de repliegue, avalaron el Pacto como algo inevitable y manifestaron su beneplácito, aunque a nivel declamatorio. La UIA —nucleamiento de las mayores empresas del sector, en particular de las filiales de las empresas transnacionales— se integró en la Confederación Industrial Argentina (CINA), dejó de funcionar como organismo independiente y pasó a formar parte de la CGE, que, de esta manera, pareció acrecentar su poder institucional⁽¹⁰⁰⁾. La aceptación del Pacto por parte de aquellos sectores no era una renuncia al empleo de sus recursos de poder, sino que marcaba un compás de espera.

Con la crisis del gobierno peronista, los dirigentes tradicionales de la ex UIA cambiaron su estrategia. Uno de los factores irritativos para la dirigencia empresarial era el control oficial de los precios: en setiembre de 1974, desde la CINA se emitió una declaración crítica de esa política. La posterior renuncia de GELBARD puso en tela de juicio el rol político de la CGE y amplió el espacio para que la dirigencia tradicional cuestionara la dirección de la central empresarial e, inclusive, al propio gobierno.

La CGE comenzó a pagar los costos políticos de su apoyo al gobierno. Por un lado, éste le exigía el máximo respaldo; por el otro, los empresarios afectados por la política económica hacían responsable a la Confederación de dicha política. En

(99) Cf. GILBERT, ISIDORO, *El oro de Moscú*, Buenos Aires, 1995, donde se analizan las vinculaciones del ministro con los comunistas; SEADNE, M. (1998).

(100) SCHVARZER, J. (1991), págs. 208 y 209.

este marco, en los primeros meses de 1975, se inició el resquebrajamiento de la entidad: varias organizaciones gremiales del interior del país se desafiliaron; poco después renunciaron dos miembros tradicionales de la UIA, incorporados como dirigentes de la Confederación, y, a mediados de año, se desafilió la Federación Agraria Argentina (FAA). Las diferencias de enfoque sobre la política económica y sobre la forma de resolver los problemas políticos y sociales generaron contradicciones en el interior de la CGE que llevaban a la fragmentación de su precaria unidad⁽¹⁰¹⁾.

En agosto de 1975, se formó un frente empresario integrado por entidades tradicionales. La Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la SRA, las entidades agrupadas en Confederaciones Rurales Argentinas, la FATAP y FADEEAC se integraron en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La misma se constituyó en un crítico severo de la CGE y en un polo opositor al gobierno.

En el seno de la CINA, al compás de la crisis, surgieron distintos movimientos. El primero fue el Movimiento Empresario del Interior (MEDI), originado en las provincias pobres del noroeste argentino, crítico de la conducción cegeísta y con tendencias "desarrollistas". En forma paralela se organizó el Movimiento de Unidad Industrial (MUI), que agrupaba, básicamente, a dos organizaciones empresarias de Buenos Aires y Córdoba, en su momento enfrentadas con GELBARD. Por su parte, los antiguos dirigentes de la UIA se aglutinaron en el Movimiento Industrial Argentino (MIA), continuador de las posturas de los industriales tradicionales. Los empresarios industriales con relaciones directas con el sector agropecuario se organizaron en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), entidad cuya influencia acompañaría el futuro crecimiento del complejo agroindustrial en la economía argentina.

En los meses previos al golpe militar, la crítica empresarial a la política oficial adquirió un tono apocalíptico. En diciembre de 1975, la APEGE censuró el estatismo, la corrupción y la especulación, y juzgó que el país "continúa su camino hacia el marxismo". Al mes siguiente, en el curso de una reunión que congregó a unos trescientos empresarios, la Asamblea manifestó su desacuerdo con la política económico-social que "constituye la antesala inexorable del comunismo" y propuso el "estado de movilización". El corolario de esta campaña fue el paro llevado a cabo el 16 de febrero, donde la organización de los empresarios tradicionales logró la adhesión del comercio, los servicios y el agro.

Este paro contribuyó a crear el clima social para el inminente golpe de Estado. La imagen de caos y desgobierno no fue sólo el resultado de la ineficacia del gobierno y de los sectores ligados a él. Dicha imagen fue fomentada por las FF.AA.

(101) SCHVARZER, J. (1991), págs. 212 y 213.

y por la cúpula empresaria liberal que se manifestaba a través de la APEGE. El gobierno era severamente acusado por su incapacidad para "poner orden" y era presentado como el promotor del caos social característico del populismo, con lo que, implícitamente, se legitimaba el objetivo de los golpistas: la construcción de un orden social alternativo ⁽¹⁰²⁾.

Las posiciones de la SRA reflejaron el creciente deterioro de las relaciones de la gran burguesía agraria con el gobierno peronista. La política económica de GELBARD no permitía alentar expectativas favorables entre los terratenientes de la pampa húmeda. La inicial resistencia al proyectado impuesto a la renta normal potencial de la tierra se transformó en aceptación resignada del Acta de Compromiso Agropecuario Nacional, mediante la cual la SRA —en agosto de 1973— acordó con el gobierno la concertación de la política agropecuaria. En cambio, los productores agrupados en CARBAP no avalaron el compromiso, optando por ganar tiempo y por la preservación de su poderosa capacidad de maniobra frente a las decisiones oficiales ⁽¹⁰³⁾. A mediados de 1974, la SRA censuró la "Comisión de Política Concertada" por su ineficacia para atender las demandas sectoriales. En setiembre de 1974, al igual que la CRA y otras organizaciones ruralistas, la SRA dejó de participar en dicha Comisión.

El anteproyecto de Ley Agraria fue otro tema irritante para los sectores propietarios rurales. Si las medidas impositivas fueron consideradas confiscatorias por la SRA, aquél, que pretendía favorecer la conversión en propietarios de los arrendatarios y aparceros, fue juzgado como un intento encubierto de reforma agraria. En 1975, la entidad ruralista señalaba a los autores del mismo "que el pueblo votó por la doctrina y la filosofía justicialista y no para que a través de conceptos similares se pretenda introducir ideas ajenas al sentir nacional..." ⁽¹⁰⁴⁾. En general, la mayoría de las organizaciones representativas de los intereses terratenientes se opusieron al anteproyecto juzgándolo de "inconstitucional", de esencia "marxista colectivizante" y que conducía a una virtual confiscación de la propiedad y a la socialización compulsiva ⁽¹⁰⁵⁾.

Desde octubre de 1974 hasta el fin de la administración peronista, las relaciones entre el gobierno y la gran burguesía agraria experimentaron un notorio agravamiento. A pesar de que la renuncia de GELBARD abría, según la SRA, "el camino a un deseable reencuentro entre gobierno y agro", la política de ingresos de sus sucesores continuó perjudicando a dicho sector. En consecuencia, con la excepción del breve mandato de CELESTINO RODRIGO, la SRA se opuso a la gestión de todos los demás equipos que ocuparon el Ministerio de Economía hasta marzo de 1976.

(102) CAVAROZZI, M. (1983), págs. 57-59.

(103) DE RIZ, L. (2000), págs. 161 y 162.

(104) SIDICARO, R. (1982), págs. 84-86.

(105) LATTUADA, M. (1987), págs. 82 y 83.

A juicio de la entidad, la política populista de defensa del salario real conducía a la hiperinflación, por lo que era necesario restringir los ingresos de los sectores asalariados e incrementar los precios relativos de los productos agrarios para estimular su exportación.

Las demostraciones de oposición a la política gubernamental comenzaron a multiplicarse. A principios de 1975, se concretó la formación de una entidad coordinadora de los sectores propietarios agropecuarios integrada por la SRA, CRA y CONINAGRO. En marzo de 1975, esas organizaciones dispusieron una suspensión de la venta de carne vacuna en disconformidad con la política vigente. Ante la reticencia de la SRA a seguir impulsando medidas de fuerza, la CRA y la FAA se comprometieron a realizar nuevas huelgas de productores ganaderos. Estas organizaciones, con la adhesión de la SRA, llevaron a cabo un paro ganadero de diez días de duración. Nuevamente, a fines de octubre y principios de noviembre, las mismas entidades patrocinaron otra paralización de las tareas comerciales del agro, que se prolongó durante dieciocho días. En el seno de la APEGE, la SRA desempeñó un papel relevante liderando una parte significativa del empresariado y contribuyendo al escenario propiciatorio del golpe.

El comportamiento de la FAA, organización que nucleaba a gran número de pequeños y medianos productores rurales, tuvo aspectos sinuosos. Enrolada en la CGE, pareció dispuesta a acompañar la orientación de la política económica de GELBARD. La suspensión de los trámites de los juicios de desalojo de arrendatarios y aparceros rurales, la apertura de líneas de créditos para facilitar la adquisición de tierras por parte de los antiguos tenedores precarios desalojados por leyes anteriores, el estímulo de las actividades de las cooperativas que operaban en la producción y comercialización de productos agropecuarios, la prohibición al capital extranjero de realizar inversiones en la actividad rural, etc., estaban en línea con los reclamos de la entidad. Sin embargo, al igual que las Ligas Agrarias y la Unión de Productores Agropecuarios de la República Argentina, no movilizó a sus afiliados en defensa del equipo económico. Por otra parte, el mantenimiento de niveles de precios agropecuarios declinantes no satisfizo las expectativas de sus afiliados. En julio de 1975, cuando se iniciaba el período de crisis económica y de rápido desgaste político que llevaría al golpe de Estado, la entidad se retiró de la CGE.

6.9. LAS RELACIONES EXTERIORES

6.9.1. Las relaciones con los Estados Unidos y Europa

La vuelta del peronismo al gobierno prefiguraba la profundización de las tendencias autonómicas características de la Tercera Posición. En esta línea se inscribió la política exterior del gobierno de CAMPORA, tratando de incrementar sustancialmente el poder de negociación frente a los EE.UU. y respaldando una mayor independencia individual y colectiva de los países latinoamericanos. En el marco de la OEA, en junio de 1973, la Argentina planteó la reestructuración de la Organización, cuya marcha fue calificada de "fracaso". Pidió la participación de